



Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía todas las firmas auténticas y se han ocultado los datos personales protegidos y los códigos que permitirían acceder al original.

Dirección General de Carreteras
CONSEJERÍA DE TRANSPORTES
MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS

A-SER-004577/2021

MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRATO DE SERVICIO PARA LA REDACCIÓN DEL "PLAN DE CARRETERAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2023 - 2030".

Se emite este informe a los efectos de la justificación exigida en el artículo 116.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, que establece que:

"4. En el expediente se justificará adecuadamente:

- a) La elección del procedimiento de licitación.*
- b) La clasificación que se exija a los participantes.*
- c) Los criterios de solvencia técnica o profesional, y económica y financiera, y los criterios que se tendrán en consideración para adjudicar el contrato, así como las condiciones especiales de ejecución del mismo.*
- d) El valor estimado del contrato con una indicación de todos los conceptos que lo integran, incluyendo siempre los costes laborales si existiesen.*
- e) La necesidad de la Administración a la que se pretende dar satisfacción mediante la contratación de las prestaciones correspondientes; y su relación con el objeto del contrato, que deberá ser directa, clara y proporcional.*
- f) En los contratos de servicios, el informe de insuficiencia de medios.*
- g) La decisión de no dividir en lotes el objeto del contrato, en su caso".*

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD E IDONEIDAD

De conformidad con lo que establecen los artículos 28 y 116.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, se exponen a continuación la naturaleza y extensión de las necesidades que pretenden cubrirse mediante el contrato y la idoneidad del objeto y contenido del contrato para satisfacerlas:

De conformidad con el Artículo 6 del Decreto 274/2019, de 22 de octubre, del Consejo de Gobierno, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Transportes, Movilidad e Infraestructuras corresponde a la Dirección General de Carreteras b) La planificación de las infraestructuras viarias y la formulación, en su caso, del avance del plan regional de carreteras y del catálogo viario de la Comunidad de Madrid, así como su concreción en planes anuales de obras. La propuesta de actuaciones o ejecución de obras no contempladas en el plan de carreteras, así como los estudios de tráfico y seguridad vial.

De acuerdo con el artículo 11 del Decreto 29/1993, de 11 de marzo, por el que se aprueba el



Reglamento de la Ley de Carreteras de la Comunidad de Madrid “el Plan de Carreteras de la Comunidad de Madrid, que constituye el elemento jurídico de la política sectorial, deberá contener las previsiones, objetivos, prioridades y ordenación de las carreteras regionales y de las obras de infraestructura viaria”.

El contrato tiene como objeto la elaboración de los diferentes documentos que integrarán el Plan de Carreteras de la Comunidad de Madrid para el periodo 2023 – 2030 y prestar la asistencia técnica necesaria para su tramitación, tanto ambiental como administrativa, hasta su aprobación por el Consejo de Gobierno y por la Asamblea de la Comunidad de Madrid.

Desde la redacción de los últimos planes, han sido numerosas las actuaciones que se han llevado a cabo en materia de carreteras en la Comunidad de Madrid. Sin embargo, en la actualidad, esta Dirección General de Carreteras (DGC) considera necesario el análisis y planificación de su red, para la adecuación funcional de la misma al contexto actual de movilidad sostenible y que todo ello quede recogido en un nuevo Plan de Carreteras.

El ámbito de aplicación del Plan de Carreteras será toda la red de carreteras autonómica.

Los trabajos para el desarrollo del plan se ha previsto que se desarrollen en varias fases, coincidentes con las unidades de ejecución definidas en la memoria económica del contrato:

- Fase I - Formulación del Avance del Plan de Carreteras: En esta fase se redactará el avance del plan según viene recogido en la normativa autonómica. Para ello, se realizará un análisis y diagnóstico de la situación actual de la red de carreteras y se definirán las propuestas de actuación en base a los criterios y objetivos del plan previamente definidos. Todo ello irá acompañado de una evaluación económico – financiera.
- Fase II - Solicitud de Inicio de la Evaluación Ambiental Estratégica: El Plan de Carreteras de la Comunidad de Madrid, deberá ser sometido al procedimiento de evaluación ambiental estratégica en los términos recogidos en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental. El inicio del procedimiento se hará mediante la presentación de la solicitud de inicio correspondiente.
- Fase III - Consultas a Corporaciones Locales y Organismos Públicos sobre el contenido del Avance: se realizarán las consultas a corporaciones locales y organismos públicos en base a la legislación sectorial en materia de carreteras en la Comunidad de Madrid.
- Fase IV - Redacción del Proyecto del Plan de Carreteras de la Comunidad de Madrid:



Como resultado de los informes de los organismos, administraciones y entidades consultadas en la fase anterior y atendiendo al informe de sobre las observaciones y sugerencias recibidas, se redactará el Proyecto del Plan de Carreteras.

- Fase V - Redacción del Estudio Ambiental Estratégico: De acuerdo a la legislación ambiental aplicable y teniendo en cuenta el documento de alcance remitido por el órgano ambiental, el consultor elaborará el estudio ambiental estratégico (EsAE), en el que se identificarán, describirán y evaluarán los posibles efectos significativos en el medio ambiente de la aplicación del plan, así como unas alternativas razonables técnica y ambientalmente viables, que tengan en cuenta los objetivos y el ámbito de aplicación geográfico del plan.
- Fase VI - Información Pública del Plan de Carreteras de la Comunidad de Madrid y del Estudio Ambiental Estratégico. Elaboración del Informe de Alegaciones: se someterá el Proyecto del Plan de Carreteras y el Estudio Ambiental Estratégico a información pública.
- Fase VII - Obtención de la Declaración Ambiental Estratégica y Aprobación del Proyecto de Plan de Carreteras de la Comunidad de Madrid por la Consejería de Transportes, Movilidad e Infraestructuras: la tramitación ambiental del Plan se dará por concluida con la emisión de la correspondiente Evaluación Ambiental Estratégica.
- Fase VIII - Aprobación por el Consejo de Gobierno y por la Asamblea de la Comunidad De Madrid: el Plan deberá ser elevado por la Consejería de Transportes, Movilidad e Infraestructuras la Consejería de Transportes al Consejo de Gobierno para su aprobación por Decreto.

Una vez aprobado por el Consejo de Gobierno, el Plan será remitido a la Asamblea de Madrid a los efectos de dar cumplimiento a lo establecido en los números 3 y 5 del artículo 14 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid.

2. ANTECEDENTES

En la Comunidad de Madrid se redactó el primer Plan de Carreteras 1986-1993, el segundo Plan de Carreteras 1994-2001 y el Avance del Plan de Carreteras de Madrid 2002-2009. Posteriormente, se redactó Plan de Carreteras 2009 – 2020, pero no llegó a aprobarse. Por tanto, la Comunidad de Madrid precisa la actualización de la planificación de su red viaria a medio y largo plazo de forma que se puedan determinar sus necesidades presupuestarias y las dotaciones oportunas para alcanzar una red funcional y sostenible en el año horizonte.



3. INSUFICIENCIA DE MEDIOS

De conformidad con lo que establece el artículo 63.3 a) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, se informa a continuación de la insuficiencia de medios propios para la realización del contrato de servicios indicado:

Debido a la reducida disponibilidad de medios humanos y técnicos, la Dirección General de Carreteras no puede desarrollar con los medios existentes este estudio y su tramitación hasta su aprobación, por lo que ha de recurrir a una contratación exterior para su desarrollo por particulares que coadyuve a adoptar la mejor opción por este centro directivo y por ende, el cumplimiento y realización de sus fines institucionales.

Para llevar a cabo los trabajos anteriormente descritos es imprescindible disponer de personal especialista en las disciplinas que resultan necesarias para el desarrollo del contrato (planificación territorial de infraestructuras, estudios de tráfico y movilidad y proyectos de carreteras)

Además, la Dirección General de Carreteras no cuenta con personal técnico especializado para desarrollo de trabajos de evaluación ambiental estratégica de planes y programas, de acuerdo con lo establecido en la legislación sectorial de evaluación ambiental.

A todo lo anterior hay que añadir la necesidad de contar con especialistas en estudios económicos financieros que analice la viabilidad económica y de inversión del Plan, de los que tampoco se dispone en la Dirección General de Carreteras.

Por último, es necesario disponer de especialistas en SIG que lleven a cabo las labores de implementación del Plan y sus actuaciones en dicho software, de los que tampoco se dispone en la Dirección General de Carreteras.

Por todo lo anterior podemos concluir diciendo que la Dirección General de Carreteras no cuenta en la actualidad con medios personales y técnicos suficientes para poder realizar los trabajos objeto del contrato.

Al mismo tiempo no se considera conveniente ampliar los medios existentes en el seno de la Dirección General para llevarlos a cabo, lo cual determina la necesidad de recurrir a los servicios de empresas del sector que colaboren con la Administración, y que realicen el apoyo



técnico en sus propias instalaciones.

4. PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN.

Dado que se trata de un contrato de servicios de los previstos en el artículo 17 de la LCSP, cuyo valor estimado (calculado de acuerdo al artículo 101 de la LCSP) es superior a 100.000 euros, se utiliza el procedimiento abierto. (Art. 159 LCSP).

El expediente objeto de la presente contratación se tramita mediante ABIERTO CON PLURALIDAD DE CRITERIOS en aplicación de los artículos, 131, 145 y 156 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en garantía de los principios de publicidad, concurrencia, transparencia, igualdad y trato no discriminatorio que permite garantizar la objetividad y la libre concurrencia de los posibles licitadores interesados.

Asimismo, la Disposición Cuadragésima Primera de la LCSP reconoce la naturaleza de prestaciones de carácter intelectual a los servicios de arquitectura, ingeniería, consultoría y urbanismo, con los efectos que se derivan de las previsiones contenidas en la Ley.

5. JUSTIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN. FÓRMULA DE VALORACIÓN

En base al apartado 2 del artículo 131 y 145.1 y 3 de la LCSP, la adjudicación se realizará utilizando una pluralidad de criterios de adjudicación basados en el principio de mejor relación calidad -precio.

El presente contrato tiene por objeto prestaciones de carácter intelectual, tal y como establece la D.A. 41ª de la LCSP, por lo que procede aplicar más de un criterio de adjudicación, de acuerdo con lo previsto en el artículo 145.3.g) de la LCSP.

La determinación de varios criterios de adjudicación, se justifican en el hecho de permitir a todo empresario capacitado la presentación de proposiciones y adjudicar el contrato al licitador que, en su conjunto, efectúe la proposición más ventajosa, sin atender exclusivamente al precio más bajo.



Respecto a los criterios de adjudicación es de aplicación a la presente licitación lo dispuesto en el artículo 145.4 de la LCSP *“Los órganos de contratación velarán por que se establezcan criterios de adjudicación que permitan obtener obras, suministros y servicios de gran calidad que respondan lo mejor posible a sus necesidades; y, en especial, en los procedimientos de contratos de servicios que tengan por objeto prestaciones de carácter intelectual, como los servicios de ingeniería y arquitectura.*

En los contratos de servicios del Anexo IV, así como en los contratos que tengan por objeto prestaciones de carácter intelectual, los criterios relacionados con la Calidad deberán representar, al menos, el 51 por ciento de la puntuación asignable en la valoración de las ofertas, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2.a) del artículo 146.”

1. CRITERIOS CUALITATIVOS EVALUABLES AUTOMÁTICAMENTE

La valoración de los criterios cualitativos elegida permite una clasificación objetiva de los ofertantes conforme a la experiencia profesional. La calidad por el equipo de trabajo aportada por la experiencia es fundamental en la consecución de obtención de la excelencia en el resultado del Plan de Carreteras, esto supone un valor añadido a la ejecución y su relación directa con el objeto del contrato (RTACRC 600/2016).

El personal que ha participado en trabajos similares acumula buenas prácticas que benefician la ejecución del contrato y conocimientos que evitan que se reproduzcan déficit e incongruencias en la elaboración. Por ello, la experiencia es un factor indiscutible para afrontar con garantías la correcta ejecución del contrato.

Entre las empresas y profesionales del sector existe una dilatada experiencia en las materias exigidas y en su integración, por lo que el requisito exigido en cuanto al número de años de experiencia es, por un lado, un mínimo que consideramos imprescindible para asegurar el trabajo; y por otro lado, no limita el número de licitadores, puesto que la experiencia del mercado sobrepasa la experiencia requerida. Todo ello de acuerdo con el Considerando 94 Directiva 2014/24.

Por otro lado se ha valorado, dadas las características del contrato, contar con un entorno tecnológico de trabajo, en concreto se valorará el espacio de trabajo colaborativo en la nube, con ello se permite que se garantice la consolidación de la información que se genere en el desarrollo del contrato con la incorporación de tecnologías de virtualización y recuperación de datos que evitan los riesgos de pérdida o utilización indebida de información. Igualmente esto



supone un valor añadido a la ejecución.

2. CRITERIOS CUALITATIVOS EVALUABLES MEDIANTE JUICIO DE VALOR

Este criterio se justifica para conocer la adecuación de la propuesta de la empresa licitadora al Pliego de Prescripciones Técnicas y los conocimientos de la misma sobre los trabajos a ejecutar.

Los planes de carreteras son instrumentos de planificación que se deben redactar periódicamente por parte de las administraciones titulares. En el caso de la Comunidad de Madrid, el último plan se redactó para el periodo 2009-2020 (aunque no llegó a aprobarse) y desde entonces no se ha vuelto a licitar ninguno, por tanto, no existen trabajos similares recientes en la Comunidad de Madrid.

Analizando este tipo de planes en otras administraciones autonómicas, los planes más recientes fueron aprobados entre los años 2015 y 2017 (tan sólo en tres administraciones autonómicas: Castilla La Mancha, Asturias y País Vasco). Actualmente sólo dos administraciones autonómicas (Andalucía y La Rioja) están trabajando en planes similares.

Por tanto, los planes de carreteras se constituyen como instrumentos de planificación singulares que se redactan con una periodicidad elevada.

Esta singularidad de los planes hace que sea conveniente la consideración de criterios cualitativos evaluables mediante juicio de valor. Estos criterios persiguen la valoración de la propuesta de metodología de trabajo por parte de los licitadores, de manera que se pueda evaluar el conocimiento de los licitadores de la materia, el conocimiento y puesta al servicio del contrato de las técnicas de recopilación y análisis de información más convenientes, la planificación de los recursos humanos y materiales para buen desarrollo del contrato y los mecanismos de coordinación y colaboración con la administración para este mismo fin.

En aras de garantizar la elección de la mejor oferta de las presentadas en relación al objeto de contrato, se considera imprescindible abordar el estudio desde una adecuada metodología propuesta por el Consultor.

Con la información contenida en la memoria se valorará el conocimiento que la empresa tiene sobre el objeto del contrato y procesos y necesarios para alcanzar el entregable final.

Fórmula de valoración: la fórmula indicada para la valoración de los criterios económicos (precio más ventajoso) se ha elegido porque permite una clasificación objetiva de las distintas



ofertas en función de su importe.

Fórmula de valoración

La fórmula para puntuar la oferta económica utilizada tiene en consideración la Resolución 51/2019, de 6 de febrero del TACP de la Comunidad de Madrid que establece que para la determinación de la fórmula se han de respetar tres principios fundamentales: la mayor baja será la que obtenga la totalidad de los puntos del criterio, no se tendrán en cuenta relaciones matemáticas que recaigan sobre la baja media de las ofertas, la oferta igual al tipo no obtendrá puntuación y no se incluirán umbrales.

Puntuación Cualitativa: se obtendrá mediante la suma de la puntuación obtenida por cada licitador en los diferentes apartados de los criterios cualitativos evaluables automáticamente por aplicación de fórmulas.

Puntuación económica: se calculará para cada oferta por interpolación lineal entre 0 puntos para una oferta igual a Presupuesto Base de licitación y 49 puntos para la oferta más baja, de acuerdo con la siguiente fórmula:

$$49 \times \frac{\text{Presupuesto de licitación} - \text{Oferta económica de la empresa}}{\text{Presupuesto de licitación} - \text{Oferta económica más baja}}$$

Se asignará la puntuación máxima a la oferta económica de menor importe.

Se asignarán 0 puntos a las ofertas iguales al Presupuesto Base de licitación.

La puntuación total del licitador será la suma de la puntuación obtenida por los criterios cualitativos evaluables automáticamente y la puntuación económica obtenida.

Ofertas anormalmente bajas.

En el presente expediente de contratación, de todos los criterios de adjudicación previstos, el único parámetro objetivo que permite identificar que una oferta pueda considerarse anormal, es el bajo importe del precio ofertado. Dicho de otro modo, la máxima puntuación posible en el presente contrato derivada de los criterios de adjudicación distintos del precio no sería susceptible de suponer que la oferta pudiera resultar inviable por resultar anormalmente baja. No ocurriría lo mismo, por ejemplo, si uno de los criterios de adjudicación fuese una reducción del plazo que pudiese dar lugar a la necesidad de duplicar equipos de trabajo, incrementar horas extras o bien horas de trabajo nocturno etc..

6. JUSTIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE SOLVENCIA

El apartado 1 del artículo 65 de la LCSP dispone que solo podrán contratar con el sector



público las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incurso en alguna prohibición de contratar, y acrediten su solvencia económica y financiera y técnica o profesional.

Por su parte, el artículo 86 de la LCSP establece que la solvencia económica y financiera y técnica o profesional para un contrato se acreditará mediante la aportación de los documentos que se determinen por el órgano de contratación de entre los previstos en los artículos 87 a 91 de dicha Ley.

Dado que se trata de un contrato de servicios, la clasificación no es un requisito exigible de conformidad con el artículo 77.1.b) LCSP y, por tanto, no se puede requerir con carácter obligatorio para contratos para los cuales no esté prevista su exigencia. Además, el objeto de este contrato no está incluido en el Anexo II del Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

La solvencia económica y financiera y la solvencia técnica y profesional exigidas están vinculadas al objeto del contrato y son proporcionales al mismo para garantizar la posibilidad de que las ofertas sean evaluadas en condiciones de competencia efectiva. En base al artículo 86 de la LCSP se establece que la solvencia económica y financiera y técnica o profesional para un contrato se acreditará mediante la aportación de los documentos que se determinen por el órgano de contratación de entre los previstos en los artículos 87 a 91 de dicha Ley.

Por lo que respecta a la solvencia económica y financiera, se requiere el cumplimiento de lo establecido en el artículo 87.1.a) y el criterio para su acreditación será el volumen anual de negocios, referido al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos concluidos, que deberá ser al menos a una vez y media el valor anual medio estimado del contrato, por tener una duración superior a un año. En el presente contrato no concurren riesgos especiales vinculados a la naturaleza de los servicios que aconsejen exigir un importe superior al equivalente a una vez y media el valor anual medio del contrato.

Por lo que respecta a la solvencia técnica y profesional exigidas y con base en el 90.1 a) y a fin de garantizar un adecuado nivel de competencia, se considera adecuado que la referida solvencia se lleve a cabo mediante la presentación de una relación de los servicios efectuados por los licitadores en el curso de los 5 años anteriores a la fecha de finalización del plazo de presentación de proposiciones. Los trabajos deberán ser de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del presente contrato. El requisito mínimo será que el importe anual



acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior al 100% de la base imponible del presente contrato.

Se ha ampliado a CINCO (5) años el periodo de realización de servicios o trabajos realizados de igual o similar naturaleza que se pueden presentar, porque se ha considerado escaso el periodo de 3 años por la reducida contratación de este tipo de trabajos en los últimos años, y porque cinco años es una referencia temporal suficientemente reciente cuando se valoran trabajos de este tipo.

Criterio de similitud: Se entenderá que un trabajo es de igual o similar naturaleza al que constituye el objeto del contrato cuando dicho trabajo se corresponda con el código CPV 71311210-6 en al menos sus cuatro primeros dígitos.

Los criterios escogidos para que los licitadores justifiquen su solvencia figuran en la documentación que se pone a disposición de los licitadores; son criterios que están relacionados con el objeto y el importe del contrato y se encuentran entre los enumerados en la LCSP y son garantía de una correcta ejecución.

7. JUSTIFICACIÓN DEL COMPROMISO DE ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS

Solvencia técnica complementaria:

Esta unidad promotora considera, que dada la especialización de este tipo de contratos de carácter intelectual, en los que la experiencia del personal que ejecuta el contrato es la base de la contratación, se ha de requerir un plus de experiencia a los licitadores admitidos a licitación y por ello es necesaria esta concreción de solvencia exigida.

En cambio en el artículo 76.2 LCSP, relativo al compromiso de adscripción, establece que el órgano de contratación tiene la posibilidad de exigir un plus de solvencia a los licitadores, es decir que, además de acreditar la solvencia o, en su caso clasificación, les podrá exigir que se comprometan a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios personales o materiales suficientes para ello, mediante el establecimiento de la obligación de señalar los concretos medios personales.

En definitiva, este compromiso de adscripción de medios humanos se configura, como una obligación adicional de proporcionar unos medios concretos para la ejecución del contrato, siendo indispensable para la ejecución del contrato.



8. CONDICIONES ESPECIALES EN RELACIÓN CON LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Siendo un objetivo de esta Administración la mejora de la calidad en el empleo, de las diversas consideraciones que ofrece el art. 202.2 de la Ley de Contratos del Sector Público, se ha optado por incluir consideraciones de tipo social, en concreto las relativas a que en los supuestos de nuevas contrataciones, bajas y sustituciones, se contrate a personas en situación legal de desempleo. Se considera que esta obligación está vinculada al objeto del contrato conforme a lo establecido en el apartado 6 del artículo 145 y que resulta adecuada dado que no se justificaría su no observancia a lo largo de la vida del contrato, de acuerdo con la Directiva 2014/24 (Considerandos 97 y 98 y los artículos 18.2 y 70), que permite incluir como posibles criterios de adjudicación o condiciones de ejecución relacionadas con aspectos sociales, fomentar la estabilidad y calidad en el empleo, todo ello con el objetivo de profundizar en una contratación socialmente más responsable.

9. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO.

El valor estimado del contrato se ha determinado según el artículo 101 de la LCSP. En este contrato no están previstas prórrogas ni modificaciones, por lo que no se prevé importe para estos conceptos y el valor estimado del contrato coincide con el presupuesto base de licitación sin IVA. Se adjunta en documento separado la memoria económica explicativa de cómo se ha calculado ese valor.

10. JUSTIFICACIÓN NO DIVISIÓN EN LOTES

Del análisis de los trabajos a desarrollar descritos en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y la necesaria planificación y coordinación en el desarrollo de los mismos se desprende la necesidad de no dividir el objeto del contrato en lotes. (Artículo 99.3 LCSP).

Para este tipo de contrato la planificación de las tareas y la coordinación entre los diferentes profesionales es fundamental para el funcionamiento del equipo y la realización de un trabajo de calidad cumpliendo el plazo establecido en el contrato. Por otro lado, la concordancia y la coherencia de los documentos redactados es más fácil de conseguir con una única empresa o unión temporal de empresas.

Se tiene mayor garantía de obtener unos documentos bien enlazados entre sí y con



soluciones más homogéneas cuando los trabajos objeto del contrato son desempeñados por una empresa o unión temporal de empresas, minimizándose los riesgos de incongruencias entre documentos.

La realización independiente de las diversas prestaciones comprendidas en el objeto del contrato dificultaría la correcta ejecución del mismo dado que se perdería la optimización del control de la ejecución global del contrato, se dificultaría la coordinación de la ejecución de las prestaciones, se incrementarían los costes de la ejecución por la existencia de una pluralidad de contratistas diferentes y por otro lado, la incorporación de diferentes empresas a la ejecución del contrato principal, podría dar lugar a que se aportasen soluciones dispares o incluso contradictorias, lo cual supondría desvirtuar el propio objeto del contrato.

En base a todo lo expuesto, la Dirección General de Carreteras no considera adecuado la división en lotes de este contrato de servicios.

**EL SUBDIRECTOR DE PLANIFICACIÓN,
PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN**

Firmado digitalmente por: JORQUERA MOYA JUAN JOSE
Fecha: 2021.03.09 11:32

LA DIRECTORA GENERAL DE CARRETERAS

Firmado digitalmente por: BERRIO FERNANDEZ CABALLERO MARIA INÉS
Fecha: 2021.03.09 17:37

